



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA**

**SENTENCIA TC/0823/18**

**Referencia:** Expediente núm. TC-04-2015-0196, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por los señores Robert Antonio Pelletier Noble, Rafael Cristóbal Pelletier Navarro, Ana Pelletier viuda Gil, Maura Dilamis Pelletier Ramírez, Rafael Arsenio Pelletier Ramírez, Ana Ivonne Pelletier Ramírez, Fernando Arturo Pelletier Noboa, Arsenio Pelletier Ramírez y Luis Ángel Pelletier Noboa contra la Sentencia núm. 666, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013)

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael

Expediente núm. TC-04-2015-0196, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Robert Antonio Pelletier Noble, Rafael Cristóbal Pelletier Navarro, Ana Pelletier viuda Gil, Maura Dilamis Pelletier Ramírez, Rafael Arsenio Pelletier Ramírez, Ana Ivonne Pelletier Ramírez, Fernando Arturo Pelletier Noboa, Arsenio Pelletier Ramírez y Luis Ángel Pelletier Noboa contra la Sentencia núm. 666, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013).



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica de Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

**I. ANTECEDENTES**

**1. Descripción de la decisión recurrida**

La Sentencia núm. 666, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013). Dicha decisión rechazó el recurso de casación interpuesto por los señores Robert Antonio Pelletier Noble, Rafael Cristóbal Pelletier Navarro, Ana Pelletier viuda Gil, Maura Dilamis Pelletier Ramírez, Rafael Arsenio Pelletier Ramírez, Ana Ivonne Pelletier Ramírez, Fernando Arturo Pelletier Noboa, Arsenio Pelletier Ramírez y Luis Ángel Pelletier Noboa en contra de la Sentencia núm. 2618, dictada por el Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central el treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009). La decisión recurrida en la especie presenta el siguiente dispositivo:

*Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Robert Antonio Pelletier Noble y Compartes en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central en fecha 31 de agosto de 2009, en relación a la Parcela núm. 665, del Distrito Catastral núm. 8, del Municipio y Provincia de Azua, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas en provecho de los Dres. Ulises Cabrera y Ángel Pérez abogados de la recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

No consta en el expediente notificación de la Sentencia núm. 666.

**2. Fundamento de la resolución objeto del recurso de revisión constitucional**

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia fundó, esencialmente, su fallo en los siguientes argumentos:

*Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer Medio: Violación a la Ley por errónea aplicación del artículo 2262 del Código Civil y errónea calificación de los hechos. Desnaturalización de los hechos de la causa y falta de base legal por insuficiencia de sustento fáctico que justifique la aplicación de la ley; Segundo Medio: Ausencia de motivos y omisión de estatuir;*

*(...) Considerando, que en el desarrollo de ambos medios que se reúnen para una mejor ponderación, los recurrentes en síntesis alegan lo siguiente: a) que, interpusieron una Litis sobre Derechos Registrados en contra de la recurrida, a los fines de impugnar la transferencia de derechos realizada mediante el Acto núm. 10, de fecha 2 de junio de 1983, instrumentado por Notario Público, relativa al inmueble propiedad de estos; b) que, esta litis concluyó con la Sentencia emanada por el tribunal de primer grado mediante la cual se declara inadmisibile la demanda en razón de que la acción ya se encontraba perimida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2262 del Código Civil; c) que, esta decisión fue recurrida en apelación y producto de este recurso, la corte a-qua emitió el falló íntegramente copiado en el cuerpo de esta sentencia; d) que, continua indicando el recurrente que la corte a-qua violó los preceptos de ley al acoger la inadmisibilidat, toda vez que realizó una errónea interpretación de la ley al señalar que el acto mediante el cual se realizó la transferencia estaba revestido de una naturaleza civil, cuando en*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*realidad este acto por el carácter de la operación en él contenida, debe ser regido por el artículo 64 del Código de Comercio; e) que, en la sentencia atacada no se exponen los motivos que llevaron a la corte a tomar esa decisión y que tampoco fueron contestados los pedimentos contenidos en las conclusiones vertidas por estos, incurriendo así en el vicio de ausencia de motivos;*

*Considerando, que la prescripción es un medio que sin necesidad de declarar el fondo del proceso tiene un carácter extintivo, y que la corte a-qua pudo comprobar que el plazo para invocar la nulidad del acto ya se encontraba ventajosamente vencido, no precisaba que ésta estatuyera al fondo sobre las pretensiones de los recurrentes;*

*Considerando, que en el caso en cuestión no se trataba de una litis tendente a conocer la forma en que se llevó a cabo la disolución de una sociedad de comercio, sino, que lo que se trata es de la impugnación del mecanismo de transferencia utilizado por Inversur, S. A., para adjudicarse la Parcela núm. 665, del Distrito Catastral núm. 8, del Municipio y Provincia de Azua;*

*Considerando, que el aspecto jurídico controvertido en la especie es si el Tribunal Superior de Tierras juzgó con arreglo a la ley al establecer que la acción de los hoy recurrentes en casación estaba prescrita en virtud de lo que establece el artículo 2262 del Código Civil, o si, como alegan dichos recurrentes, las reglas sobre la prescripción aplicables al caso son las del artículo 64 del Código de Comercio, en razón de que el documento utilizado para la transferencia del inmueble es de naturaleza comercial, específicamente contentivo de la disolución de una sociedad de comercio;*

*Considerando, que esta Corte de Casación ha podido establecer del estudio del recurso y de los documentos que lo sustentan, que el registro de la*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*propiedad a nombre de la razón Social Inversur, 5. A., data del 19 de julio 1983 según consta en el Certificado de Título 9071, en referencia al acto número 10 del 2 de junio de 1983; que la corte a-qua juzgó correctamente al computar el plazo para la prescripción de conformidad con el artículo 2262 del Código Civil, aplicable a las acciones relacionadas con la transferencia de la propiedad inmobiliaria, en virtud de lo que establece el principio VIII, de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario, que dice que para suplir duda, ambigüedad, oscuridad o carencia de dicha ley, se reconoce el carácter supletorio del Derecho común, es decir, las previstas en el Código Civil y las normas que lo complementan. Más aún porque el artículo 64 del Código de Comercio se refiere a la prescripción de las acciones intentadas contra los socios no liquidadores y sus viudas, herederos o representantes de las sociedades de comercio que no es el caso, por lo que los dos medios argüidos, que son respondidos de manera conjunta por su estrecha vinculación, deben ser desestimados;*

*Considerando, que las disposiciones del artículo 64 del Código de Comercio son ajenas a la Jurisdicción Inmobiliaria, siendo las reglas del derecho común las aplicables por cuanto gran parte de las instituciones jurídicas por medio de las cuales se transfieren o afectan inmuebles registrados son las que están previstas en el Código Civil; que independientemente las instituciones previstas en dicho código, resulta también y al acudir a las fuentes del derecho en materia inmobiliaria ante el vacío de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, por aplicación de la analogía, la más a fin a la materia inmobiliaria es el derecho civil y no el derecho mercantil, por lo que al aplicar la prescripción del artículo 2262 del Código Civil, contrario a lo pretendido por la parte recurrente el Tribunal Superior de Tierras ha realizado una adecuada aplicación de la ley; que por consiguiente, lo argüido en los dos medios de casación planteados, deben ser rechazados;*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

### **3. Presentación del recurso de revisión constitucional**

El recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 666 fue sometido al Tribunal Constitucional por los señores Robert Antonio Pelletier Noble y compartes, según instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce (2014). Mediante este recurso, los recurrentes alegan violación en su perjuicio de las garantías relativas al debido proceso de ley y a la tutela judicial efectiva, consagradas en el artículo 69<sup>1</sup> de la Constitución; específicamente, por falta de motivación y omisión de estatuir.

El recurso en cuestión fue notificado a Inversor, S.A., parte recurrida, mediante el Acto núm. 425/2015, de nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Eusebio Mateo Encarnación.<sup>2</sup>

### **4. Hechos y argumentos del recurrente en revisión**

En su recurso de revisión, el señor Robert Antonio Pelletier Noble y compartes solicitan el acogimiento del mismo, así como la nulidad de la Sentencia núm. 666, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuya revisión es el objeto de la especie. Los recurrentes basan, esencialmente, sus pretensiones en los siguientes argumentos:

- a. *En la presente sección del recurso de revisión expondremos las razones por las cuales la decisión recurrida vulnera el derecho a la motivación de las decisiones jurisdiccionales como se encuentra previsto en el artículo 25 de la*

---

<sup>1</sup> «Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: [...] 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia».

<sup>2</sup> Alguacil ordinario de la secretaria de la Suprema Corte de Justicia.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Convención Americana de Derechos Humanos y expuesto por el Tribunal Constitucional en su decisión TC/0009/13 del 11 de febrero de 2013.*

b. *El derecho a la motivación de las decisiones jurisdiccionales es una de las piedras angulares del Estado de Derecho en el ordenamiento jurídico dominicano. Aunque no se encuentra específicamente señalado en el artículo 69 constitucional — que establece las normas fundamentales del debido proceso- sí tiene un sustento sólido en el bloque de constitucionalidad y está estrechamente vinculado al derecho al recurso.*

*El recurso de casación fallado por la Tercera Sala de la Suprema Corte se fundamentaba en dos argumentos principales desarrollados por los recurrentes en dos medios distintos y diferenciados. El primer medio se encuentra desarrollado en los párrafos 25 al 108 de su recurso de casación y se refiere a la "Violación a la ley por errónea aplicación del artículo 2262 del Código Civil y errónea calificación de los hechos. Desnaturalización de los hechos de la causa y falta de base legal por insuficiencia de sustento fáctico que justifique la aplicación de la ley". El segundo medio, se encuentra desarrollado en los párrafos 109 al 136 de su recurso de casación y se refiere a la "Ausencia de motivos y omisión de estatuir".*

c. *Como puede verse, se trata de dos medios completamente distintos, que procuraban demostrar dos fallas fundamentales, pero distintas de la decisión no. 2618 dictada en fecha 31 de agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.*

*Es clara la diferencia en naturaleza y fundamentación de los medios presentados por los recurrentes. Uno trata sobre los hechos cometidos en contra de los accionantes y el otro trata, claramente, de la falta de motivación por parte del Tribunal Superior de Tierras en su decisión.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Sin embargo, la Tercera Sala de la Suprema Corte decidió que estos medios pueden ser "respondidos de manera conjunta por su estrecha vinculación, deben ser desestimados"1. A continuación expondremos por qué, al hacer esto, la Suprema Corte no sólo validó la vulneración del derecho a la motivación de las decisiones jurisdiccionales en las que incurrió el Tribunal Superior de Tierras, sino que la hizo propia, violentando ella misma el derecho que estaba llamada a responder.*

d. *El primer medio de casación -"Violación a la Ley por errónea aplicación del artículo 2262 del Código Civil y errónea calificación de los hechos. Desnaturalización de los hechos de la causa y falta de base legal por insuficiencia de sustento fáctico que justifique la aplicación de la ley"-respondía al hecho de que el acto No. 10, impugnado por los recurrentes tiene una naturaleza mercantil y no civil.*

*Por ese motivo, la norma jurídica aplicable para calcular la prescripción del plazo para demandar la nulidad del acto no. 10 no es el artículo 2262 del Código Civil, sino el artículo 64 del Código de Comercio. Lo que es lo mismo que decir, que el plazo de prescripción aludido no es de veinte (20) años a partir de la emisión del acto, sino de cinco (5) años a partir del momento en el cual se han cumplido los requisitos formales para la disolución de la compañía, en este caso la sociedad comercial Inversiones Bienes Raíces, C. por A.*

e. *La importancia de exponer este medio de casación es que este es el único que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia responde, aunque lo hace mal. Todos los demás argumentos los cubre con el manto de unos razonamientos exiguos y que se limitan a exponer la idea de que el artículo aplicable es el 2262 del Código Civil y no el 64 del Código de Comercio.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Del estudio de la brevísima Decisión No. 2618 del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, puede verificarse que este no se refiere en ningún momento a la acción mediante la cual se pretendía revocar el procedimiento irregular de transferencia del derecho de propiedad sobre la parcela n° 665 del D.C. n° 8 del municipio y provincia de Azua. Se limita únicamente a pronunciarse sobre el plazo de prescripción sobre la nulidad del acto No. 10, también impugnado por los recurrentes.*

f. *El ejemplo claro de esto, y que es una de las principales razones por las que la Tercera Sala no logra responder todos los medios presentados por los accionantes es que, al inicio de sus razonamientos establece "que en el desarrollo de ambos medios que se reúnen para una mejor ponderación". Sin embargo, al final de su razonamiento dice que "los dos medios argüidos, que son respondidos de manera conjunta por su estrecha vinculación, deben ser desestimados". Todo esto sin explicar —como ya hemos señalado- cómo y por qué el Tribunal Superior de Tierras podía guardar silencio sobre el medio relativo al supuesto traspaso de la propiedad inmobiliaria de la parcela n° 665 del D.C. n° 8.*

*Es decir, la Tercera Sala rechazó ambos medios porque consideró que uno de ellos no era válido, pero sin haber explicado nunca en forma sistemática por qué la suerte de uno necesariamente debía seguir la suerte del otro. Esto con el agravante de que el segundo medio respondía precisamente al reclamo de los recurrentes de que el Tribunal de Tierras no motivó adecuadamente su decisión.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**5. Hechos y argumentos de la recurrida en revisión**

La recurrida, Inversor, S.A., presentó un escrito de defensa en el marco del este recurso el veintitrés (23) de agosto del dos mil quince (2015). Ella solicita a este colegiado, en síntesis, de manera principal, que se inadmita el recurso de la especie por carencia de especial trascendencia o relevancia constitucional; subsidiariamente, que este sea rechazado en todas sus partes.

A. Las razones sobre las que los correcurridos motivan sus planteamientos son las siguientes:

a. Sobre el medio de inadmisión:

*9.- El presente caso no posee una especial trascendencia constitucional va que la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de justicia no incurrió en violación alguna a los precedentes de este Honorable Tribunal ni muchos menos vulneró los derechos fundamentales de los Recurrentes.*

b. Sobre el fondo del recurso:

*Se lamentan los Recurrentes de que los jueces de casación no le hayan respondido las decenas de cuestionamientos, planteamientos y argumentos que desarrollan en las 39 páginas de su Memorial respecto a actuaciones y documentación de los años 1974, 1975 1983, referidas a las operaciones comerciales cumplidas por “Inversiones Bienes Raíces, C. por A.”, Corp, Agro-Azua, Inversur, etc. etc. Pero ocurre que cuando aplica LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, no caben enfoques sobre el fondo del caso y menos aún respuestas del Juez sobre ellos, a pesar de que, en el caso ocurrente, la sentencia objetada produce explicaciones y consideraciones*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*sobre abundantes respecto del fondo de la controversia aun tratándose de un tema jurídicamente conocido como INADMISIBILIDAD O MEDIO DE NO RECIBIR previsto por La Ley 834 del 15 de Julio 1978.*

**6. Pruebas documentales depositadas**

Los documentos que figuran en el trámite del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional son, entre otros, los siguientes:

1. Sentencia núm. 666, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013).
2. Recurso de casación incoado por el señor Robert Antonio Pelletier Noble y compartes contra la Sentencia núm. 666, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013).
3. Decisión núm. 2618, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009).
4. Acto núm. 425/2015, de nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Eusebio Mateo Encarnación, alguacil ordinario de la secretaria de la Suprema Corte de Justicia.
5. Escrito de defensa de la recurrida, Inversor, S.A., presentado ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de agosto de dos mil quince (2015).



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS**  
**DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**7. Síntesis del conflicto**

Mediante Sentencia núm. 20080034, dictada por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Azua el siete (7) de marzo de dos mil ocho (2008), fue inadmitida la demanda en nulidad de actos de venta inmobiliaria presentada por los actuales recurrentes en revisión, el señor Robert Antonio Pelletier Noble y compartes, contra la ahora recurrida en revisión, sociedad comercial Inversor, S.A., por considerar dicho tribunal de primera instancia prescrita la misma, en virtud del artículo 2262 del Código Civil.

Inconformes con la aludida decisión, el señor Robert Antonio Pelletier y compartes, interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, el cual mediante la Sentencia núm. 2618, de treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009), confirmó en todas sus partes la sentencia de primer grado. Posteriormente, el señor Robert Antonio Pelletier y compartes impugnaron en casación la Sentencia núm. 2618, pero resultó rechazado mediante la Sentencia núm. 666, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013).

Insatisfechos con la decisión adoptada por la Corte de Casación, el señor Robert Antonio Pelletier y compartes interpusieron entonces el recurso de revisión que nos ocupa, invocando que la sentencia atacada violó su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por lo que reclama su anulación al Tribunal Constitucional.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

## **8. Competencia**

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11.

## **9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional**

Este tribunal constitucional estima que procede la admisión del presente recurso de revisión constitucional de sentencia jurisdiccional, en atención a los siguientes razonamientos:

a. Para determinar la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales resulta ante todo imperativo evaluar la exigencia relativa al plazo de su interposición, que figura prevista en la parte *in fine* del artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso ha de interponerse en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida en revisión. La inobservancia de dicho plazo, de acuerdo con los precedentes de este tribunal (TC/0247/16), se encuentra sancionada con la inadmisibilidad.

b. Sin embargo, en el presente caso, no consta en el expediente constancia alguna de la toma de conocimiento o notificación de la sentencia recurrida. Por esta razón, el plazo legal dispuesto en el referido artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, debe considerarse que aún sigue abierto y el presente recurso presentado en tiempo hábil.<sup>3</sup>

c. La especie corresponde a una decisión que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la proclamación de la Constitución de

---

<sup>3</sup> Sobre el particular, ver Sentencias TC/0623/15, TC/0621/16 y TC/0468/17.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

la República el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo que satisface el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital de su artículo 277.<sup>4</sup> En efecto, la decisión impugnada, que dictó la Suprema Corte de Justicia —en funciones de Corte de Casación—, el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013), puso término al proceso judicial de la especie y agotó la posibilidad de interposición de recursos ante el Poder Judicial. Se trata, en consecuencia, de una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada material<sup>5</sup> susceptible de revisión constitucional.

d. Asimismo, el caso corresponde al tercero de los supuestos taxativamente previstos en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que limita las revisiones constitucionales de decisiones firmes a las tres siguientes situaciones: «1. Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental [...]». Como puede observarse, el recurrente en revisión basa su recurso en la tercera causal del citado artículo 53.3, pues alega vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En virtud de esta última disposición, el recurso de revisión procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:

*a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación haya sido subsanada; y c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de*

---

<sup>4</sup> «Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia».

<sup>5</sup> En ese sentido, ver Sentencia TC/0153/17.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.*

e. El cumplimiento del supuesto previsto en el literal *a)* del precitado art. 53.3 resulta satisfecho, ya que el recurrente no tuvo la oportunidad de invocar la alegada violación a sus derechos fundamentales en el curso del proceso pues, según se alega, fue cometida por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia al dictar la decisión hoy recurrida, con relación a un recurso de casación. Por igual, el presente recurso de revisión satisface los presupuestos de los acápites *b)* y *c)* del precitado artículo 53.3. Nótese que, de una parte, el recurrente agotó todos los recursos disponibles sin que la conculcación del derecho fuera subsanada; y, de otra parte, la violación alegada resulta imputable «de modo inmediato y directo» a la acción de un órgano jurisdiccional que, en este caso, fue la Suprema Corte de Justicia».

f. Además, el Tribunal Constitucional también estima que el recurso de revisión que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia constitucional,<sup>6</sup> de acuerdo con la parte *in fine* del artículo 53.3 de la citada Ley núm. 137-11.<sup>7</sup> Este criterio se funda en que la solución del conflicto planteado permitirá a esta sede constitucional precisar el alcance del derecho a una decisión debidamente motivada en los procesos jurisdiccionales, como garantía constitucional del debido proceso. Por vía de consecuencia, procede rechazarse el medio de inadmisión planteado por la recurrida en el sentido contrario, sin necesidad de plasmarlo en el dispositivo de la presente decisión.

---

<sup>6</sup> En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional «[...] sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal -Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional».

<sup>7</sup> «Párrafo. - La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado».



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**10. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional**

Respecto al fondo del recurso de revisión que nos ocupa, este colegiado expone lo siguiente:

a. El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión constitucional interpuesto contra una decisión firme de la Suprema Corte de Justicia a la cual se le imputa, primero, falta de debida motivación y, segundo, omisión de estatuir.

b. Respecto al primer medio los recurrentes sostienen que dicho fallo cuenta con una notable deficiencia motivacional equivalente a un defecto sustantivo de la decisión; es decir, presenta una evidente contradicción entre los fundamentos normativos y la decisión adoptada. Sobre el particular, los recurrentes argumentan que la Suprema Corte de Justicia erró en la correcta aplicación del derecho al desnaturalizar la prescripción civil estatuida en el artículo 2262 del Código Civil, sobre los actos traslativos de propiedad inmobiliaria, argumentando la cuestión en el siguiente sentido:

*la norma jurídica aplicable para calcular la prescripción del plazo para demandar la nulidad del acto no. 10 no es el artículo 2262 del Código Civil, sino el artículo 64 del Código de Comercio. Lo que es lo mismo que decir, que el plazo de prescripción aludido no es de veinte (20) años a partir de la emisión del acto, sino de cinco (5) años a partir del momento en el cual se han cumplido los requisitos formales para la disolución de la compañía, en este caso la sociedad comercial Inversiones Bienes Raíces, C. por A.*

c. Para responder a este primer medio de revisión sustentado en la alegada deficiencia motivacional de dicho fallo resulta necesario ponderar si las



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

motivaciones adoptadas en la sentencia objeto del recurso de la especie satisfacen el *test de la debida motivación* desarrollado por este colegiado en su Sentencia TC/0009/13. Dentro de este contexto, se observa que la Suprema Corte de Justicia desestimó el medio de casación presentado por los hoy recurrentes al valorarse la naturaleza jurídica del acto impugnado, originalmente impugnado por los recurrentes desde el primer grado del conflicto, según se evidencia en el texto del aludido fallo citado a continuación:

*Considerando, que en el caso en cuestión no se trataba de una litis tendente a conocer la forma en que se llevó a cabo la disolución de una sociedad de comercio, sino, que lo que se trata es de la impugnación del mecanismo de transferencia utilizado por Inversur, S. A., para adjudicarse la Parcela núm. 665, del Distrito Catastral núm. 8, del Municipio y Provincia de Azua;*

*Considerando, que el aspecto jurídico controvertido en la especie es si el Tribunal Superior de Tierras juzgó con arreglo a la ley al establecer que la acción de los hoy recurrentes en casación estaba prescrita en virtud de lo que establece el artículo 2262 del Código Civil, o si, como alegan dichos recurrentes, las reglas sobre la prescripción aplicables al caso son las del artículo 64 del Código de Comercio, en razón de que el documento utilizado para la transferencia del inmueble es de naturaleza comercial, específicamente contentivo de la disolución de una sociedad de comercio;*

*Considerando, que esta Corte de Casación ha podido establecer del estudio del recurso y de los documentos que lo sustentan, que el registro de la propiedad a nombre de la razón Social Inversur, S. A., data del 19 de julio 1983 según consta en el Certificado de Título 9071, en referencia al acto número 10 del 2 de junio de 1983; que la corte a-qua juzgó correctamente al computar el plazo para la prescripción de conformidad con el artículo 2262 del Código Civil, aplicable a las acciones relacionadas con la transferencia de*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*la propiedad inmobiliaria, en virtud de lo que establece el principio VIII, de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario, que dice que para suplir duda, ambigüedad, oscuridad o carencia de dicha ley, se reconoce el carácter supletorio del Derecho común, es decir, las previstas en el Código Civil y las normas que lo complementan. Más aún porque el artículo 64 del Código de Comercio se refiere a la prescripción de las acciones intentadas contra los socios no liquidadores y sus viudas, herederos o representantes de las sociedades de comercio que no es el caso, por lo que los dos medios argüidos, que son respondidos de manera conjunta por su estrecha vinculación, deben ser desestimados.*

d. En relación con los parámetros recomendados a los jueces en la Sentencia TC/0009/13, en cuanto a la debida motivación que deben tener los fallos, este colegiado expuso las siguientes reglas:

*a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.*

e. En la Sentencia TC/0009/13, esta sede constitucional también señaló la existencia de otros cinco criterios adicionales, sobre los cuales este tribunal hará la



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

debida validación del cumplimiento de los mismos a continuación. En el citado precedente se especificó al efecto que «[...] el cabal cumplimiento del deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial requiere:

*a) Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b) Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c) Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d) Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional».*

f. Luego de valorados los motivos expuestos por la Suprema Corte de Justicia en contraste con los estándares motivacionales listados en los párrafos anteriores, esta sede constitucional ha advertido que estos satisfacen los aludidos criterios y procede, en consecuencia, a desestimar el primer medio promovido por los recurrentes en revisión, en virtud de los argumentos que se desarrollan a continuación. En efecto, contrario a lo argüido por los recurrentes, la Suprema Corte de Justicia cumplió con el *test de debida motivación*, ya que:

1. Abordó de manera precisa y sistemática el medio de casación en cuestión al indicar de claramente cuál era el medio objeto de su ponderación y decisión.

2. Expuso de forma concreta y precisa sus valoraciones sobre los hechos, pruebas y derecho aplicado, al indicar sin ambigüedades las razones por las cuales al proceso de transferencia inmobiliaria impugnado no podía aplicársele el régimen de prescripción dispuesto para las acciones intentadas contra los socios no



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

liquidadores y sus viudas, herederos o representantes de las sociedades de comercios a la luz del principio VIII de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario.

3. Manifestó las consideraciones pertinentes que hoy han permitido a esta sede determinar los razonamientos que asistieron a la adopción de la suerte del caso, al manifestar que

*las disposiciones del artículo 64 del Código de Comercio son ajenas a la Jurisdicción Inmobiliaria, siendo las reglas del derecho común las aplicables por cuanto gran parte de las instituciones jurídicas por medio de las cuales se transfieren o afectan inmuebles registrados son las que están previstas en el Código Civil (...) Más aún porque el artículo 64 del Código de Comercio se refiere a la prescripción de las acciones intentadas contra los socios no liquidadores y sus viudas, herederos o representantes de las sociedades de comercio que no es el caso.*

4. Evitó la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales para sustentar su decisión, al desarrollar de manera sustantiva el régimen de prescripción aplicable a la especie, el alcance del artículo 64 del Código de Comercio y los principios supletorios del derecho inmobiliario dominicano.

5. Finalmente, se legitima la fundamentación en cuestión al abordar íntegramente todos los elementos relevantes del mismo.

g. Como segundo medio de revisión constitucional, los recurrentes alegan omisión de estatuir por la Suprema Corte de Justicia al expresar que

*en ningún momento a la acción mediante la cual se pretendía revocar el procedimiento irregular de transferencia del derecho de propiedad sobre la*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*parcela n° 665 del D.C. n° 8 del municipio y provincia de Azua. Se limita únicamente a pronunciarse sobre el plazo de prescripción sobre la nulidad del acto No. 10, también impugnado por los recurrentes.*

Sobre la falta u omisión de estatuir, resulta pertinente recordar lo fallado por este colegiado en su Sentencia TC/0578/17, en la cual expresó que es el «vicio en el cual incurre el tribunal que no contesta todas las conclusiones formuladas por las partes, implica una violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 69 de la Constitución».

h. Sobre el particular, al valorar los medios abordados por la Suprema Corte de Justicia en la indicada Sentencia núm. 666, este colegiado pudo advertir que, en efecto, dicho segundo medio casacional versaba sobre cuestiones puramente de fondo, o sea, sobre el estudio del procedimiento de transferencia del inmueble. En este sentido, el Tribunal Constitucional estima que la indicada alta corte efectuó una sana administración de justicia al considerar la unión procesal lógica que vinculaba la admisión de la instancia objeto del recurso de casación con la posibilidad de valorar sus respectivos aspectos de fondo. Es decir, que contestó de manera conjunta, armónica y expresa<sup>8</sup> la suerte del segundo medio casacional, auxiliándose de los razonamientos previamente adoptados respecto a la suerte del primero. El precedente análisis demuestra que la Suprema Corte de Justicia estatuyó sobre el indicado segundo medio de casación propuesto por las recurrentes en casación.

i. En virtud de los precedentes razonamientos, este colegiado considera que la Suprema Corte de Justicia motivó apropiadamente los fundamentos de su Sentencia

---

<sup>8</sup> Para contestar el segundo medio casacional, la Suprema Corte de Justicia falló de la siguiente manera: “*Considerando, que en el desarrollo de ambos medios que se reúnen para una mejor ponderación [...] esta Corte de Casación ha podido establecer que [...] la corte a-qua juzgó correctamente al computar el plazo para la prescripción de conformidad con el artículo 2262 del Código Civil, aplicable a las acciones relacionadas con la transferencia de la propiedad inmobiliaria [...] por lo que los dos medios argüidos, que son respondidos de manera conjunta por su estrecha vinculación, deben ser desestimados; [...] por lo que al aplicar la prescripción del artículo 2262 del Código Civil, contrario a lo pretendido por la parte recurrente el Tribunal Superior de Tierras ha realizado una adecuada aplicación de la ley; que por consiguiente, lo argüido en los dos medios de casación planteados, deben ser rechazados;*”



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

núm. 666 —rechazando el recurso de casación sometido a su arbitrio—, aplicando correctamente los preceptos constitucionales y la normativa ordinaria vigente. En consecuencia, este colegiado estima que procede rechazar, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de la especie y confirmar la Sentencia núm. 666.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Constan en acta los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto, y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

**DECIDE:**

**PRIMERO: ADMITIR**, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra la Sentencia núm. 666, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013) por los señores Robert Antonio Pelletier Noble, Rafael Cristóbal Pelletier Navarro, Ana Pelletier viuda Gil, Maura Dilamis Pelletier Ramírez, Rafael Arsenio Pelletier Ramírez, Ana Ivonne Pelletier Ramírez, Fernando Arturo Pelletier Noboa, Arsenio Pelletier Ramírez y Luis Ángel Pelletier Noboa.

**SEGUNDO: RECHAZAR**, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, **CONFIRMAR** la Sentencia núm. 666, en virtud de los argumentos que figuran en el cuerpo de la presente decisión.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**TERCERO: DECLARAR** el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.

**CUARTO: COMUNICAR** esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los indicados recurrentes, señores Robert Antonio Pelletier Noble y compartes, así como a la recurrida, sociedad comercial Inversor, S. A.

**QUINTO: DISPONER** que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

**Julio José Rojas Báez**  
**Secretario**